



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN: RC-251/2019

QUEJOSA Y RECURRENTE: [REDACTED]

MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO  
RAMÍREZ RUIZ

SECRETARIA: AURORA ÁLVAREZ PLATA

Ciudad de México. Acuerdo del Séptimo Tribunal  
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente  
al tres de octubre de dos mil diecinueve.

**VISTOS** los autos del toca RC-251/2019, para  
resolver el recurso de revisión interpuesto por [REDACTED]

[REDACTED] por conducto  
de su apoderado [REDACTED] en contra de la  
sentencia dictada el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por  
el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Décimo  
Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en  
el juicio de amparo indirecto 455/2019; y,

RESULTANDO:

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, [REDACTED] [REDACTED] por conducto de su apoderado [REDACTED] solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Juez Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que hizo consistir en lo siguiente:

**"IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME:**

*De la autoridad antes señalada, se reclama la resolución dictada con fecha **DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE**, en los autos del expediente **265/2019**, formado con motivo de la solicitud de providencias precautorias promovidas por mi poderdante, en contra [REDACTED]*

**LO ANTERIOR COMO ACTO PREJUDICIAL**".

**SEGUNDO.** Por razón de turno, correspondió el







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 conocimiento de la demanda al Juzgado Décimo Tercero de  
2 Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, cuyo titular la  
3 registró bajo el número **455/2019**, quien admitió a trámite por  
4 auto de quince de mayo de dos mil diecinueve; dio vista al  
5 agente del Ministerio Público Federal de su adscripción; solicitó  
6 a la autoridad responsable su informe justificado; que dada la  
7 naturaleza del acto reclamado no existía tercero interesado a  
8 ninguna persona; y, por último, fijó fecha para la celebración de  
9 la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo el dieciséis  
10 de julio de dos mil diecinueve, procediendo al dictado de la  
11 sentencia definitiva, misma que concluyó con la negativa del  
12 amparo.

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22

**TERCERO.** Inconforme con esa determinación,

15 [REDACTED]

16 [REDACTED] por conducto de

17 su apoderado [REDACTED] interpuso recurso de

18 revisión, del que por razón de turno correspondió su

19 conocimiento a este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia

20 Civil del Primer Circuito, que por haber sido interpuesto en

21 tiempo y forma, y ser de su competencia, lo admitió por auto de

22 presidencia de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve,

1 ordenándose dar vista a la Agente del Ministerio Público de la  
2 Federación adscrita, quien no formuló pedimento.

3

4 **CUARTO.-** Por acuerdo de dieciocho de septiembre  
5 de dos mil diecinueve, fueron turnados los autos a la ponencia  
6 del magistrado Roberto Ramírez Ruiz, para la elaboración del  
7 proyecto de resolución correspondiente.

8

9 **CONSIDERANDO:**

10

11 **PRIMERO.** La competencia de este órgano  
12 colegiado ha quedado establecida en términos del auto de  
13 presidencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve.

14

15 **SEGUNDO.** Colmados los aspectos formales en el  
16 presente asunto, se procede a su estudio de fondo, para lo cual  
17 el magistrado relator entrega a los integrantes de este tribunal,  
18 adjunto al proyecto respectivo, copia del recurso de revisión, así  
19 como de la sentencia recurrida, agregándose copia certificada  
20 de esta última a los autos del toca en que se actúa.

21

22 **TERCERO.** Importa precisar que, dada la íntima  
23 relación que guardan entre sí los planteamientos que el







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 inconforme propone, en términos de lo dispuesto en el artículo  
2 76 de la Ley de Amparo, éstos se estudian en forma conjunta,  
3 los cuales se analizan bajo el principio de estricto derecho, ya  
4 que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos de  
5 suplencia de la queja deficiente, previstos en el artículo 79 de la  
6 propia ley.

7  
8 En primer lugar, por tratarse de cuestiones  
9 necesarias para solucionar este asunto, a continuación se  
10 sintetizan las consideraciones que sustentan la resolución  
11 reclamada, así el juzgador Federal, consideró:

UNAI COLECCIÓN  
JIVIL DEL PRIMER  
ICUITO

12  
13 • Que el acto reclamado lo constituye la sentencia  
14 interlocutoria de doce de abril de dos mil diecinueve, que al  
15 resolver el recurso de revocación interpuesto por la institución  
16 bancaria quejosa, confirmó el proveído de veintiocho de marzo  
17 de dos mil diecinueve, el cual declaró procedentes las  
18 providencias precautorias planteadas, ordenó girar oficio a la  
19 Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que por su  
20 conducto se informara a las instituciones del Sistema Financiero  
21 Nacional la retención de bienes de los futuros demandados, y  
22 para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran  
23 causar con la medida precautoria, fijó una garantía a cargo de

1 la quejosa por la cantidad de \$12,677.17 (doce mil seiscientos  
2 setenta y siete pesos 17/100 M.N.).

3  
4 • Que son infundados los conceptos de violación,  
5 primeramente porque la Ley de Instituciones de Crédito no es  
6 aplicable supletoriamente al Código de Comercio en lo relativo  
7 a las providencias precautorias, para determinar que no se  
8 deba exigir a la institución bancaria quejosa la carga de exhibir  
9 la garantía a que se refiere la fracción V del artículo 1075 del  
10 Código de Comercio.

11  
12 • Que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema  
13 Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de  
14 tesis 389/2009, que refiere la propia recurrente en sus motivos  
15 de inconformidad, sostuvo que la aplicación supletoria de una  
16 ley respecto de otra procede cuando existe omisión en la ley,  
17 para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras  
18 normas o principios generales contenidos en otras leyes y  
19 señala o los requisitos necesarios para que opere la  
20 supletoriedad que son: a) Que el ordenamiento legal a suplir  
21 establezca expresamente esa posibilidad; b) Que la ley a suplir  
22 no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que  
23 pretenden aplicarse supletoriamente; c) Que la omisión o vacío







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas  
2 para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado;  
3 y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen  
4 el ordenamiento legal a suplir.

5

6 • Que el artículo 1176 de Código de Comercio  
7 establece que la retención de bienes como providencia  
8 precautoria deberá regirse, por lo dispuesto para los juicios  
9 ejecutivos mercantiles y que el otorgamiento de la garantía a  
10 que se refiere el artículo 1179 de ese Código, se deberá hacer  
11 conforme a lo que disponga la ley procesal de la entidad  
12 federativa y en caso de que exista oscuridad o insuficiencia  
13 conforme a los principios generales del derecho.

AL COLEGIO  
IL DEL PRIMER  
UITO

14

15 • Que para que se esté en el supuesto de  
16 supletoriedad, es necesario que el ordenamiento a suplir no  
17 establezca expresamente la cuestión por suplir, lo que en el  
18 caso no acontece, ya que el Código de Comercio es claro en la  
19 fracción V del artículo 1175, al establecer que el solicitante de  
20 las providencias precautorias debe exhibir la garantía que  
21 respalde los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a  
22 terceros, sin que en dicho precepto exista oscuridad o  
23 insuficiencia.

1           • Que de acuerdo con lo dispuesto por el  
2 ordenamiento que regula la materia del procedimiento de  
3 origen, esto es, el Código de Comercio, en los casos en que  
4 resulte procedente decretar una providencia precautoria por  
5 actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo  
6 1168 de ese numeral, la parte que lo solicite debe cumplir el  
7 requisito a que se refiere la fracción V del artículo 1175 del  
8 citado ordenamiento, la que revela que el acogimiento de las  
9 providencias precautorias está condicionado entre otras  
10 cuestiones, a que se cumpla el requisito consistente en que la  
11 parte que lo solicite garantice los daños y perjuicios que pudiera  
12 ocasionar la medida al deudor en cualquiera de los supuestos  
13 previstos en la propia ley.

14  
15           • Que la norma no señala excepción alguna  
16 atendiendo al carácter de la parte que la solicita, por ejemplo,  
17 que se trate de un particular, una persona moral o una  
18 institución bancaria, así, la obligación de garantizar los daños y  
19 perjuicios persiste, con independencia de la acreditada  
20 solvencia con que cuente la solicitante del procedimiento de  
21 medidas precautorias; por lo tanto, si la quejosa solicitó el  
22 procedimiento de medidas cautelares y tiene acreditada







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 solvencia, aun así está obligada a garantizar los daños y  
2 perjuicios.

3

4 • Que es verdad que la Ley de Instituciones de  
5 Crédito forma parte del sistema jurídico general en materia  
6 mercantil, esto es, se trata de una ley especial en materia de  
7 comercio; sin embargo, no por ello la institución bancaria está  
8 exenta de exhibir la garantía solicitada por el Juez responsable,  
9 ya que no se actualiza la supletoriedad de la Ley de  
10 Instituciones de Crédito al Código de Comercio, pues éste  
11 contiene regulación expresa en cuanto a los requisitos exigidos  
12 para el otorgamiento de las providencias precautorias, y por su  
13 parte, el numeral invocado de la Ley de Instituciones de Crédito  
14 no tiene como finalidad establecer la exención a un requisito  
15 para los procedimientos judiciales en materia mercantil.

16

17 • Que del numeral 86 de la Ley de Instituciones de  
18 Crédito no se advierte que la regulación de la actividad bancaria  
19 o crediticia, ni su organización o funcionamiento, tenga alguna  
20 influencia en las reglas procesales de naturaleza especial que  
21 rigen los juicios y procedimientos mercantiles en los que un  
22 banco sea parte, con motivo de las relaciones jurídicas que  
23 tenga con diversas personas físicas o morales.

AL CREDITADO  
DEL PRIMER  
UITO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1           • Que así la regla establecida en el artículo 86 en  
2 estudio, conforme a la cual se exenta de constituir fianzas o  
3 depósitos a las instituciones bancarias que no estén en  
4 liquidación o en procedimiento de quiebra, por presumirse que  
5 tienen acreditada solvencia, no es aplicable al caso en estudio,  
6 porque al haberse promovido una solicitud de providencias  
7 precautorias, rige la norma especial referida a los  
8 procedimientos mercantiles, como es el Código de Comercio, la  
9 cual impone la carga procesal de exhibir necesariamente una  
10 garantía, a quien solicite una providencia precautoria; por ello,  
11 no tiene aplicación al caso, concreto, por no pertenecer al  
12 sistema normativo que regula los requisitos de procedencia de  
13 las providencias precautorias y por regularse en éste de manera  
14 completa dichos requisitos.

15  
16           En contra de las anteriores razones de derecho la  
17 parte recurrente, esencialmente, aduce:

18  
19           → Que la resolución reclamada viola los artículos 1,  
20 14 y 16 Constitucionales, en relación a los principios de  
21 legalidad, exhaustividad, debida fundamentación y motivación y  
22 *pro homine*, pues el ángulo a través del cual se analiza el  
23 concepto de violación esgrimido fue incorrecto, pues la







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 sentencia se debió resolver bajo el último de los principios de  
2 derecho citado, es decir, desestimando aquellos requisitos que  
3 limitan o restringen el acceso a la garantía tutelar.

4

5 → Que lo que se sostiene no es en modo alguno  
6 que una institución bancaria pueda sustraerse de la obligación  
7 de reparar los daños que se causen con motivo del trámite de  
8 unas providencias precautorias; sin embargo, se afirma que la  
9 acción positiva de garantizar los mismo, encuentra su obstáculo  
10 en lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones de  
11 Crédito.

12

13 → Que a través del juicio de amparo destacó porque  
14 razón es aplicable el ordinal 86 de la Ley de Instituciones de  
15 Crédito y ello no solo por ser supletorio, sino también porque  
16 constituye una norma especial atendiendo a la naturaleza de los  
17 destinatarios, es decir, que el problema no es de simple  
18 supletoriedad, sino que existen dos disposiciones, una que  
19 exime de una garantía y la otra que obliga a una institución de  
20 crédito a exhibirla; entonces —dice— el juzgador Federal debió  
21 resolver el problema de cómo armonizar dichas legislaciones  
22 frente a la antinomia detectada.

23

SALA IV  
VAL COLEGIO  
JIL DEL PRIMER  
JUITO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

→ Que los métodos para la solución de antinomias son diversos, y posterior a citarlos y definirlos, afirma, que el método de interpretación por analogía usado por el juzgador no es el aplicable, pues la contradicción resaltada encuentra respuesta en base al principio de especialidad, en el que la norma especial es el Código de Comercio, por ser la normatividad que regula esa figura jurídica.

→ Que no puede sostenerse la permanencia (sic) del Código de Comercio sobre la Ley de Instituciones de Crédito bajo el principio de especialidad, pues dicho argumento encontraría su obstáculo insuperable en la jurisprudencia obligatoria para el juez de rubro: **“SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO. EN SU CARÁCTER DE PERSONAS MORALES OFICIALES ESTAN EXENTAS DE PRESTAR LAS GARANTÍAS QUE LA LEY DE AMPARO EXIGE A LAS PARTES”**.

→ Que si bien dicho criterio discrepa de la sustancia del presente, también lo es que fija un común denominador y éste es la excepción a la regla general de constituir garantías atendiendo a la calidad de los destinatarios, por lo anterior, la







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 resolución no fue exhaustiva y partió de premisas incorrectas  
2 respecto como debían armonizarse las leyes.

3

4 → Que el criterio citado relevó a las sociedades  
5 nacionales de crédito de exhibir fianza o garantía, aun  
6 tratándose de juicio de amparo, y ello en atención a la  
7 naturaleza de las mismas.

8

9 → Que es importante acotar que la intención de  
10 exhibir una fianza o garantía es facilitar a aquel que ha sufrido o  
11 resentido la medida o providencia precautoria, ya sea en su  
12 persona o sus bienes, de ser resarcido en los daños o perjuicios  
13 con la mayor agilidad posible sin enfrentar ahora las aristas  
14 adyacentes al principio de universalidad patrimonial, por lo que,  
15 la obligación de responder de los daños y perjuicios nace del  
16 mandato de la ley, pero al operar como institución de banca  
17 múltiple, tiene la presunción iure et iure de ser solvente.

18

19 Conforme a lo analizado en la sentencia venida a  
20 revisión y los agravios expuestos es notorio que estos últimos  
21 devienen en **inoperantes e infundados**; por tanto, el criterio  
22 jurisprudencial que invoca no le es favorable, como se  
23 demostrará a continuación.

1           En primer lugar, se estima **inoperante** la parte de su  
2   agravio, en la que arguye que la resolución recurrida violenta en  
3   su perjuicio los principios de legalidad, exhaustividad, debida  
4   fundamentación y motivación, previstos en los artículos 14 y 16  
5   constitucionales, pues en los juicios de amparo no es dable  
6   alegar como motivo de agravio que el juez de Distrito, al  
7   resolver, violó los derechos fundamentales contenidos en la  
8   Carta Magna, en virtud de que los jueces Federales, como  
9   órganos controladores de la Constitución Política de los  
10   Estados Unidos Mexicanos, tienen por función tutelar las  
11   garantías primordiales de los gobernados, y específicamente, al  
12   determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de  
13   los actos reclamados, proceden en términos de la Ley de  
14   Amparo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación  
15   y, supletoriamente, de acuerdo al Código Federal de  
16   Procedimientos Civiles; por tanto, son éstos los ordenamientos  
17   legales que, en su caso, podría infringir el juez de Distrito al  
18   dictar sentencia en un juicio de amparo, por lo que resulta  
19   inoperante lo sostenido por la recurrente, en el sentido de que  
20   el resolutor de amparo transgredió en su perjuicio los artículos  
21   14 y 16 constitucionales.

22







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J.  
2 2/97, emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la  
3 Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su  
4 Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, página: 5, que  
5 establece:

6  
7 **“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS**  
8 **QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES**  
9 **DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS**  
10 **INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE**  
11 **ASPECTO.**

12 Históricamente las garantías  
13 individuales se han reputado como aquellos  
14 elementos jurídicos que se traducen en medios  
15 de salvaguarda de las prerrogativas  
16 fundamentales que el ser humano debe tener  
17 para el cabal desenvolvimiento de su  
18 personalidad frente al poder público. Son  
19 derechos públicos subjetivos consignados en  
20 favor de todo habitante de la República que dan  
21 a sus titulares la potestad de exigirlos  
22 jurídicamente a través de la verdadera garantía  
23 de los derechos públicos fundamentales del  
24 hombre que la Constitución Política de los  
25 Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es,  
26 la acción constitucional de amparo. Los Jueces  
27 de Distrito, al conocer de los distintos juicios de  
28 amparo de su competencia, y no de procesos  
29 federales, ejercen la función de control  
30 constitucional y, en ese caso, dictan  
31 determinaciones de cumplimiento obligatorio y  
32 obran para hacer cumplir esas determinaciones,  
33 según su propio criterio y bajo su propia  
34 responsabilidad, por la investidura que les da la  
35 ley por lo que, a juicio de las partes, pueden  
36 infringir derechos subjetivos públicos de los  
37 gobernados. Ahora bien, aun y cuando en  
38 contra de sus decisiones procede el recurso de  
39 revisión, éste no es un medio de control  
40 constitucional autónomo, a través del cual  
pueda analizarse la violación a garantías



individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional".

Por otra parte, los restantes agravios en los que la parte recurrente arguye, en esencia, que el tema central del juicio de amparo no es la supletoriedad de la Ley de Instituciones de Crédito al Código de Comercio, sino la contradicción de las hipótesis contenidas en los artículos 86 y 1175, de los citados ordenamientos, respectivamente; y, por tanto, lo que pretendía a través de sus conceptos de violación era que el juzgador Federal armonizara ambas normas; así también la afirmación de que el juzgador deja de aplicar el principio pro homine, y que al formar parte del Sistema Financiero Nacional está exenta de la obligación de presentar







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 garantía porque está acreditada su solvencia; son argumentos  
2 que devienen en **inoperantes, por reiterativos**.

3

4

Se afirma lo anterior, toda vez que de un análisis al  
5 escrito de demanda se advierte que, sus sintetizados  
6 argumentos constituyen una reiteración de lo alegado en los  
7 conceptos de violación de la demanda de amparo promovida  
8 ante el juez de Distrito; pues si bien es cierto indicó que lo  
9 pretendido era armonizar los códigos en cita, al entrar más al  
10 fondo de sus afirmaciones es claro advertir que los mismos  
11 entrañan la intención de que se considere que la Ley de  
12 Instituciones de Crédito, específicamente el artículo 86, se  
13 considere aplicable al Código de Comercio, esto es al diverso  
14 1175.

15

16 Así también invocó como principio violado el de *pro*  
17 *homine*, pues dijo que el juzgador ordinario no fundó ni motivó  
18 su resolución y dejó de aplicar los artículos 1054 y 1063 del  
19 Código de Comercio y 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.

20

21 Y, finalmente argumento que, al ser parte integrante  
22 del Sistema Financiero Nacional, estaba plenamente probada  
23 su solvencia, por lo que se le debió eximir de la obligación de

1    presentar la garantía que responda de los daños y perjuicios,  
2    que se pudieran causar con la concesión de la providencia  
3    cautelar solicitada.

4  
5            En ese contexto, para que los agravios resultaran  
6    operantes, la parte aquí recurrente, debió manifestar por qué  
7    fueron incorrectas las determinaciones del juez Federal que lo  
8    condujeron a negar el amparo, porque en el caso se estimaron  
9    infundados los conceptos de violación expuestos en el escrito  
10   de demanda, pues, consideró el juez de Distrito que con  
11   independencia de que la quejosa no pretenda que el artículo 86  
12   de la Ley de Instituciones de Crédito subordine al, o prevalezca  
13   sobre el Código de Comercio, y que dicha impetrante afirme  
14   que se trata sólo de una armonización de leyes, lo cierto es que  
15   no tiene aplicación supletoria, porque dicho Código no contiene  
16   un sistema incompleto u omiso, ya que dispone claramente que  
17   la garantía la debe otorgar toda persona para lograr la  
18   procedencia de las providencias precautorias.

19  
20            Luego, si los argumentos torales que dan sustento a  
21   la sentencia reclamada no fueron refutados, entonces deben  
22   quedar firmes para continuar rigiendo su sentido, por carecer  
23   este tribunal de elementos para su análisis.







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 Al respecto, se invoca la tesis de la extinta Tercera  
2 Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada  
3 en la página 277, del Tomo IV, Primera Parte, de la compilación  
4 de los meses Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial  
5 de la Federación, Octava Época, que es del rubro y texto  
6 siguientes:

7  
8 **“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON**  
9 **AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN LAS**  
10 **CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA**  
11 **RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS**  
12 **SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA**  
13 **DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.** Si en la  
14 sentencia recurrida el Juez de Distrito expone  
15 diversas consideraciones para sobreseer en el  
16 juicio y negar el amparo solicitado respecto de  
17 los actos reclamados de las distintas  
18 autoridades señaladas como responsables en  
19 la demanda de garantías, y en el recurso  
20 interpuesto lejos de combatir la totalidad de  
21 esas consideraciones el recurrente se concreta  
22 a esgrimir una serie de razonamientos, sin  
23 impugnar directamente los argumentos  
24 expuestos por el juzgador para apoyar su fallo,  
25 sus agravios resultan inoperantes; siempre y  
26 cuando no se dé ninguno de los supuestos de  
27 suplencia de la deficiencia de los mismos, que  
28 prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo,  
29 pues de lo contrario, habría que suplir esa  
30 deficiencia, pasando por alto la inoperancia  
31 referida”.  
32

33 A mayor abundamiento, debe decirse que los  
34 agravios que se viertan en la revisión deben estar dirigidos,  
35 invariablemente, a cuestionar o evidenciar la ilegalidad de las

1 consideraciones en que se sustenta la decisión adoptada por el  
2 juez Federal, ya que las sentencias o resoluciones emitidas por  
3 los órganos jurisdiccionales gozan de una presunción de validez  
4 que debe ser destruida mediante la construcción de argumentos  
5 suficientes que pongan en evidencia su ilegalidad y, de no ser  
6 así, se está en presencia de argumentos ineficaces.

7  
8 Entonces, se reitera, si la parte quejosa, aquí  
9 recurrente, únicamente se limitó a abundar sobre lo que adujo  
10 en sus conceptos de violación para combatir las  
11 consideraciones del acto reclamado, es obvio que no combate  
12 los fundamentos del fallo recurrido.

13  
14 Por el motivo anterior, son inoperantes los agravios  
15 que se hacen valer, pues los argumentos resultan un mayor  
16 abundamiento de los conceptos de violación que se plantearon  
17 ante el juez de Distrito y que fueron respondidos; en ese  
18 sentido, la parte quejosa debió combatir la respuesta que a ese  
19 reclamo realizó el juez de Distrito y no únicamente hacer una  
20 reiteración de los motivos de disenso.

21  
22 Bajo otro contexto, debe decirse que por lo que hace  
23 a su agravio en el que afirma que independientemente de que







4/c

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 no puede sostenerse la prevalencia del Código de Comercio  
2 sobre la Ley de Instituciones de Crédito bajo el principio de  
3 especialidad, dichas afirmaciones se encuentra en  
4 contradicción con la tesis de rubro: "*SOCIEDADES  
5 NACIONALES DE CRÉDITO, EN SU CARÁTER DE PERONAS  
6 MORALES OFICIALES ESTÁN EXENTAS DE PRESTAR LAS  
7 GARANTÍAS QUE LA LEY DE AMPARO EXIGE A LAS  
8 PARTES.*"; mismo que le es aplicable, pues fija un común  
9 denominador como lo es la excepción de constituir garantía  
10 atendiendo a la calidad de los destinatarios.

11  
12 Lo así expuesto es **infundado**.

13  
14 La anterior conclusión tiene sustento en el hecho de  
15 que, la jurisprudencia en cita es específica en cuanto al  
16 contexto en el que se surte su aplicación, es decir, con  
17 independencia de que otros ordenamientos legales establezcan  
18 dicha garantía; empero, esa especialidad de la citada ley se  
19 circunscribe, precisamente, al juicio constitucional; y, por otro,  
20 va dirigida a las sociedades nacionales de crédito, cuya  
21 naturaleza es distinta a la aquí recurrente.

22

Pues bien, en la ejecutoria de contradicción de tesis 63/1992 que diera origen a dicho criterio, se estableció, una vez analizados los artículos, entonces vigentes, 25, fracciones I y II, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; 90 y 93 de la Constitución General de la República; 1, 2, 3 y 46, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 11 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; 2 y 4, de Ley Federal de las Entidades Paraestatales; que las sociedades nacionales de crédito son personas morales oficiales, al formar parte de la Administración Pública Federal Paraestatal y estar señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como empresas de participación estatal mayoritaria, por ello, concluyó el Máximo Tribunal del País, están exentas de prestar las garantías que la propia Ley de Amparo exige a las partes, en términos de lo que dispone el precepto 9, párrafo segundo, de la ley de la materia.

Bajo ese orden de ideas, se obtiene que si bien la aquí recurrente, es una institución bancaria integrante del Sistema Financiero Mexicano; sin embargo, la misma tiene la naturaleza de una sociedad de intermediación financiera de carácter privado, que realiza operaciones de banca, es decir de







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 crédito, pero ello no la hace una Sociedad Nacional de Crédito,  
2 cuya naturaleza es distinta pues éstas forman parte de la  
3 Administración Pública Federal, razón por la cual se les  
4 considera personas morales oficiales; razones las anteriores  
5 por las cuales no le es aplicable el criterio que invoca.

6  
7 Por tanto, con independencia de la acreditada  
8 solvencia de que goza la recurrente por las operaciones de  
9 banca que realiza, ello no la exime de la obligación de exhibir la  
10 garantía a que alude la fracción V del artículo 1175 del Código  
11 de Comercio, en tanto que el mismo es claro, al establecer que  
12 quien obtenga la retención de bienes en los procedimientos de  
13 medidas cautelares reguladas por ese ordenamiento, habrá de  
14 presentar garantía para cubrir los daños y perjuicios que pueda  
15 ocasionar esa providencia, sin que se advierta que se prevea  
16 alguna excepción respecto de la calidad de la persona que  
17 acuda a solicitarlas.



18  
19 Entonces, como del Código de Comercio, no se  
20 advierte que exista alguna excepción que indique que las  
21 instituciones bancarias estén exentas de garantizar los posibles  
22 daños y perjuicios que se causen, cuando se acuerda favorable  
23 la retención de bienes a su contraparte, a partir de criterios que

1 atiendan a la naturaleza jurídica o la capacidad económica de  
2 quien promueva la medida precautoria; es inconcuso que la  
3 institución bancaria, aquí recurrente, no está exenta de exhibir  
4 la garantía respectiva.

5  
6 Por último, no es óbice a lo anterior que el  
7 recurrente solicite al inicio de los agravios la aplicación del  
8 principio *pro persona* o *pro homine*, contenido en el artículo 1  
9 constitucional; pues éste no implica que, bajo la pretendida  
10 aplicación de una interpretación más amplia o favorable, deba  
11 resolverse invariablemente que asiste la razón al gobernado;  
12 por consiguiente, si se advierte la ineficacia de los agravios de  
13 la parte recurrente la invocación de ese principio no es  
14 suficiente para variar el sentido del presente asunto.

15  
16 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial  
17 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte  
18 de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la  
19 Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de  
20 2013, Tomo 2, página 906, que establece:

21  
22 **"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO**  
23 **DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS**  
24 **ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS**  
25 **GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE**







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**CONFORME A SUS PRETENSIONES.** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes."

UNDA COLECCIÓN  
IVIL DEL PR  
ICUITO

E N

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 Por consiguiente, ante la ineficacia de los agravios  
2 hechos valer, lo que procede es confirmar la sentencia  
3 recurrida.

4  
5 Por lo expuesto y fundado, se **RESUELVE:**

6  
7 **ÚNICO. SE CONFIRMA** la sentencia sujeta a  
8 revisión que negó el amparo.

9  
10 **Notifíquese;** con testimonio de esta ejecutoria,  
11 devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su  
12 oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

13  
14 Así, por **mayoría** de votos de los señores  
15 Magistrados Elisa Macrina Álvarez Castro y Roberto Ramírez  
16 Ruiz, ponente, con voto particular en contra del Magistrado  
17 Fernando Alberto Casasola Mendoza, Presidente, lo resolvió el  
18 Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

19  
20 Firman en términos del artículo 41, fracción V, de la  
21 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los  
22 magistrados integrantes de este tribunal, ante el secretario de  
23 acuerdos que da fe.



SEPTIMO TRIBUNAL  
EN MATERIA CIVIL  
PRIMER CIRCUITO





## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**MAGISTRADO PRESIDENTE**

*Mush*

**FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA**

# MAGISTRADA

W

**ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO**

**MAGISTRADO**

**ROBERTO RAMÍREZ RUIZ**

**SECRETARIO DE ACUERDOS**

**LIC. ALEJANDRO ENRIQUE MAYÉN ESPINOSA**

**VOTO PARTICULAR FORMULADO POR EL MAGISTRADO  
FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA.**

El suscrito se aparta muy respetuosamente de las razones por las cuales el criterio de mayoría resolvió confirmar la resolución recurrida en la que se negó el amparo en el recurso de revisión R.C. 251/2019.

Lo anterior es así en tanto que, a mi juicio, debía revocarse la resolución impugnada y conceder el amparo a la quejosa, sobre la base de que al ser ésta una institución bancaria, se le debe excluir de la obligación de exhibir garantía para que procedan las providencias precautorias –retención de bienes- que solicitó en contra de los señalados como demandados, lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El criterio de la mayoría consideró, esencialmente, que el Código de Comercio establece en su artículo 1175, fracción V, de forma clara y expresa, la obligación de que el promovente de las medidas precautorias garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar éstas al deudor. En este sentido, consideraron que la Ley de Instituciones de Crédito no le es supletoria por cuanto a dicho tópico, de ahí que la exclusión de la obligación de exhibir garantía a las instituciones bancarias prevista en su artículo 86, no sea aplicable a las medidas precautorias antes señaladas, de ahí que para que éstas surtan sus efectos, sí deben exhibir la garantía que para tal efecto les sea fijada.

Pues bien, contrario a ello, considero que, en el caso, el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito sí le es



ESTIMADO TRIBU  
DE MATERIA CU  
CIRE





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 complementaria al Código de Comercio, por cuanto a que  
2 dentro de la regulación de las medidas precautorias no se toma  
3 en cuenta de forma expresa la calidad de las partes que pueden  
4 promover las mismas. En este sentido, la Ley de Instituciones  
5 de Crédito constituye una ley especial aplicable a las  
6 instituciones del sistema bancario nacional que, en una  
7 interpretación sistemática e integral, complementa las  
8 disposiciones generales del Código de Comercio.

9  
10 Ahora, para dar mayor claridad a lo anterior, es menester  
11 presentar el contenido de las legislaciones en comento para  
12 una mayor comprensión.

#### 13 14 **Código de Comercio**

15  
16 **Artículo 1175.-** El juez deberá decretar de plano la  
17 retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los  
18 siguientes requisitos:

19 I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su  
20 favor;

21 II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que  
22 se reclama, designando ésta con toda precisión;

23 III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por  
24 las cuales tenga temor fundado de que los bienes  
25 consignados como garantía o respecto de los cuales se  
26 vaya a ejercitar la acción real serán ocultados,  
27 dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que  
28 dichos bienes sean insuficientes para garantizar el  
29 adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las  
30 constancias respectivas;

31 IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo  
32 protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros  
33 bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar  
34 la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por  
35 las que exista temor fundado de que el deudor oculte,  
36 dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de  
37 dinero en efectivo o en depósito en instituciones de  
38 crédito, o de otros bienes fungibles, y

39 V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar  
40 la medida precautoria al deudor, en el caso de que no  
41 se presente la demanda dentro del plazo previsto en  
42 este Código o bien porque promovida la demanda,  
43 sea absuelta su contraparte.



El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante.

**Ley de Instituciones de Crédito**

**Artículo 86.-** Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aún tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.

Acorde al Código de Comercio, tenemos que para la procedencia de las medidas cautelares o providencias precautorias –tratándose de retención de bienes-, el solicitante debe garantizar los eventuales daños y perjuicios que pueda ocasionar en caso de que no se presente la demanda en el tiempo fijado para tal efecto, o bien, una vez promovida, su contraparte sea absuelta. Asimismo, que el monto de la garantía será fijado de forma prudencial por el juez en atención a la información proporcionada por el promovente de las medidas, siempre y cuando la misma sea asequible para el solicitante.

Sin embargo, dicha legislación, al ser de carácter general, no previó todas hipótesis que podrían actualizarse sobre dicha figura jurídica, por ejemplo, la calidad del solicitante de la medida precautoria. Para tal efecto, es patente que en nuestro sistema jurídico sí existe una legislación especial –de carácter mercantil– que regula a los integrantes del sistema financiero nacional, cuyas disposiciones también son de carácter general y se encuentran en un mismo nivel jerárquico que el Código de Comercio, a saber, la Ley de Instituciones de Crédito.



SEPTIMO TRIBU  
TO MATERIA CIV  
CIRC





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 Así, al realizar una interpretación integral y sistemática  
2 de ambos ordenamientos, considero que lo dispuesto en el  
3 artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, sí le es  
4 complementario al Código de Comercio, por lo que las  
5 instituciones bancarias sí están eximidas de exhibir o constituir  
6 garantía para efecto de que procedan las medidas precautorias  
7 consistente en la retención de bienes a su contrario dentro de  
8 un juicio mercantil.

9  
10 Tal como lo dispone el artículo en mención, los  
11 integrantes del Sistema Bancario Mexicano se reputan de  
12 acreditada solvencia mientras no se encuentren en liquidación o  
13 en procedimiento de quiebra.

14  
15 Por ello, se les excluye de la obligación de constituir  
16 depósitos o fianzas legales, debiendo interpretar que ello es  
17 aplicable a cualquier clase de juicio o procedimiento, siendo que  
18 de manera expresa se señala que lo anterior también aplica aun  
19 tratándose de la suspensión en un juicio de amparo e, incluso,  
20 dentro de un procedimiento en donde se reclamen créditos  
21 fiscales.

22  
23 La razón de ser de dicha disposición legal obedece a que,  
24 al constituir un hecho notorio la amplia solvencia de las  
25 instituciones financieras, es innecesario que exhiban algún tipo  
26 de depósito, fianza o garantía legal dentro de cualquier  
27 procedimiento, pues si éstas se encuentran destinadas a  
28 garantizar los posibles daños y perjuicios que resienta su  
29 contraparte, es patente que no existiría peligro alguno por  
30 cuanto a que, de acreditarse tal afectación, se le pudiera hacer

1 la ejecución correspondiente en contra de la instrucción  
2 bancaria.

3  
4 Es decir, los depósitos, fianza o garantías legales que se  
5 ordenan exhibir en diversos juicios o procedimientos, son  
6 precisamente un medida jurídica de prevención para garantizar  
7 que, en su caso, de actualizarse un daño y perjuicio a una de  
8 las partes con motivo de la solicitud de una medida cautelar o  
9 providencia precautoria, el solicitante de éstas cumpla con el  
10 pago respectivo. Luego, ante el temor fundado de que el  
11 solicitante de dichas medidas no pueda cumplir con dicha  
12 obligación, ante su eventual insolvencia, se le constriñe a que  
13 de forma anticipada exhiba la garantía correspondiente.

14  
15 En ese orden de ideas, la exhibición de una garantía ante  
16 la solicitud de una medida cautelar o una providencia  
17 precautoria –como en el caso lo es una retención de bienes–  
18 tiene una relación directa con la solvencia del promovente para  
19 hacer frente a los eventuales daños y perjuicios que resienta su  
20 contraria, derivados precisamente de la procedencia de las  
21 mismas.

22  
23 Por lo tanto, cuando la solvencia del promovente  
24 constituye una presunción legal –como así acontece en el  
25 presente caso–, se le debe de eximir de la obligación de exhibir  
26 garantía alguna para que procedan las providencias  
27 precautorias que solicitó.

28  
29 No pasa desapercibido que si bien es cierto el Pleno en  
30 Materia Civil del Primer Circuito, en su novena sesión ordinaria,  
31 llevada a cabo el primero de octubre de dos mil diecinueve,







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 resolvió la Contradicción de Tesis 9/2019, en la que el tema a  
2 dilucidar era precisamente sobre el que se avoca el presente  
3 voto particular –a saber, si tratándose de las medidas  
4 precautorias en materia mercantil, las instituciones que integran  
5 el sistema bancario mexicano están o no obligadas a constituir  
6 garantías para asegurar la reparación de los eventuales daños  
7 y perjuicios que podrían ocasionales a su contraparte-, a la  
8 fecha en que se resolvió el presente asunto no se contaba ni  
9 con la ejecutoria, ni con el criterio jurisprudencial derivados de  
10 dicha contradicción.

11  
12 Por ello, considero que se debieron declarar fundados  
13 los agravios hechos valer por la institución bancaria recurrente  
14 y, por tanto, revocar la sentencia materia del presente recurso  
15 revisión y otorgar el amparo solicitado, lo anterior para efecto de  
16 establecer que no tenía obligación de exhibir garantía alguna  
17 para efecto de que procediesen las providencias precautorias  
18 que solicitó.

MAGISTRADO

FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA.

26 Última hoja de la ejecutoria pronunciada el **tres de**  
27 **octubre de dos mil diecinueve**, en el recurso de revisión  
28 **RC-251/2019**, en la que por mayoría de votos, confirma  
29 negativa de amparo.- Conste.

AAP/isa \*\*

29 OCT 2019

En \_\_\_\_\_ se notifica la  
resolución que antecede por medio de lista a las partes  
en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la  
Ley de Amparo. Conste

Lic. Saúl Montesano Brand

Actuario Judicial Adscrito al

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

30 OCT 2019

En \_\_\_\_\_ la notificación a  
que se refiere la razón que antecede, surte todos sus  
efectos legales conforme a la fracción II del artículo 31  
de la Ley de Amparo. Doy fe.

Lic. Saúl Montesano Brand

Actuario Judicial Adscrito al

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito



**Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada**  
**Nombre del documento firmado: DocumentoRespuesta.pdf**  
**Secuencia: 3146915**

**Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.**

**Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal**

Firmante	<b>Nombre:</b>	ALEJANDRO ENRIQUE MAYEN ESPINOSA	<b>Estado del certificado:</b>	OK	Vigente
	<b>CURP:</b>	MAEA720715HDFYSL03			
Firma	<b>Serie del certificado del firmante:</b>	706a6620636a6600000000000000000000000000006eea	<b>Revocación:</b>	OK	No Revocado
	<b>Fecha: (UTC / Ciudad de México)</b>	04/03/2020T22:46:57Z / 04/03/2020T16:46:57-06:00	<b>Estatus de firma:</b>	OK	Valida
	<b>Algoritmo:</b>	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	<b>Cadena de firma:</b>	67 33 83 9f d7 67 2a ca 4d 0f 8f ae 0a 85 61 3a c8 19 b2 0e 5f 6d 29 84 72 e8 7b 88 a9 a3 c2 3c 00 ba 30 11 91 cc 6d a4 0e d3 41 64 55 7f 27 ef 1d 02 a9 de 53 0b 26 20 3c df 09 ca 0f 68 1c 51 cc 80 d9 ed a3 8b 49 ee d1 82 4f 61 f4 12 b3 6c a2 ea 21 03 c4 5d 27 89 31 9a 95 f7 8e 36 53 8a ec 7b 2e b5 7e 38 0b c3 7b 4f d3 e0 7a 34 6f 45 bf d5 d0 d7 a8 2c ce f5 b8 fa e2 b8 05 bc e0 89 93 74 a0 30 4c 0d 56 fd 0a 98 75 e1 ea 3f c4 4f c7 8c 88 02 32 38 4a b6 f4 4f 8a ef 76 42 e7 2f d5 46 10 f0 99 4b c1 97 3b e5 38 ae 8d 1d 01 2c a5 39 74 a8 ad 4c bf da ef 31 40 52 13 c5 aa 48 83 ce cd 55 3b 2c 96 37 9c 93 79 2d ec b7 42 32 7d 42 a6 ea 71 98 b2 b5 2e e3 10 4d ba 30 e3 63 c0 0d f4 25 c0 3d 62 77 12 ba 75 47 c6 f2 1f 64 64 3d b1 15 59 b9 aa 13 8f 6d b3 00 16 8e f9 15			
Validación OCSP	<b>Fecha: (UTC / Ciudad de México)</b>	04/03/2020T22:46:15Z / 04/03/2020T16:46:15-06:00			
	<b>Nombre del emisor de la respuesta OCSP:</b>	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	<b>Emisor del certificado de OCSP:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	<b>Número de serie del certificado OCSP:</b>	706a6620636a6600000000000000000000000000006eea			
Estampa TSP	<b>Fecha: (UTC / Ciudad de México)</b>	04/03/2020T22:46:57Z / 04/03/2020T16:46:57-06:00			
	<b>Nombre del emisor de la respuesta TSP:</b>	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	<b>Emisor del certificado TSP:</b>	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	<b>Identificador de la secuencia:</b>	3150862			
	<b>Datos estampillados:</b>	E9674988A35177EDEED3E4D7410B3F9F525014B8			